

Distopía neoliberal en México

Trama sociopolítica del poder y resistencia social

HUMBERTO MÁRQUEZ COVARRUBIAS*

Existe una fuerte simbiosis entre el poder político y el poder económico. Estado y capital son los hermanos siameses del capitalismo. En el proyecto neoliberal, el Estado es un gestor privilegiado de los negocios privados: derroca, disminuye y controla a los sindicatos; reconstruye legislaciones; organiza los mercados; desmantela la economía pública y privatiza sectores estratégicos y rentables; otorga concesiones, asigna partidas presupuestales, cubre pérdidas empresariales con recursos fiscales y deuda. En reciprocidad, los magnates financian campañas electorales, orientan el voto de sus subordinados y adoptan en sus consejos de administración a exfuncionarios; amplifican los espacios de valorización y concentran poder y riqueza para cristalizar la monopolización de la economía. Decantan una burguesía tecnocrática gestora y una élite empresarial rentista, cuya unión de intereses forma el gran partido del orden y el dinero.

Si hay un idiota en el poder es porque quienes lo eligieron están bien representados | Gandhi

Ni la banda de malhechores más despiadada y aterradora es tan terrible como una organización estatal | Tolstoi

El ejecutivo del Estado moderno no es otra cosa que un comité de administración de los negocios de la burguesía | Marx

Preludio

En la estructura social mexicana se ha consolidado una zona preferente donde campeon los potentados, los beneficiarios del modelo capitalista neoliberal. Para ellos está reservado el manejo de los sectores económicos rentables, el influjo sobre los grupos parlamentarios, el respaldo de los aparatos del Estado, el control de los monopolios, el apoyo estatal para la ampliación del mercado, la exención fiscal, la transferencia de recursos públicos al rescate de sus negocios, el manejo de información

confidencial. Además de que se enriquecerán por superexplotación, corrupción, evasión fiscal y lavado de dinero. En una zona gris intermedia persiste una diversidad de sectores sociales que cumplen el papel de bisagras para la reproducción del sistema, pueden volcarse hacia la preservación del *statu quo*, ser indiferentes o colocarse del lado de los explotados y los oprimidos. Es una masa amorfa de categorías sociales que sirven a los intereses hegemónicos y mantienen una posición conformista, oportunista o cínica (comunicadores, académicos, políticos, intelectuales, artistas), pero

*Docente investigador, Unidad Académica en Estudios del Desarrollo, Universidad Autónoma de Zacatecas

también pueden comprometerse con las clases populares, tener una posición crítica y proponer cambios sistémicos. En la base de la estructura social existe en una zona ampliada donde están las clases trabajadoras, cada vez más precarizadas y superexplotadas, se trata de los conjuntos sociales desposeídos que no disponen de más recursos que su fuerza laboral y pocas posesiones; es una masa de población que el capital, el Estado y los poderes fácticos consideran maleable y explotable, sobrante y desechable. En esta zona los problemas y conflictos son administrados por el poder mediante la violencia, la represión, la cooptación o la indiferencia. Pero en ella también se gestan formas de resistencia, concienciación, organización y acción con miras a defender su territorio, derechos y oportunidades.

Cartografía del sistema de poder

Los barones del dinero

La dinámica socioeconómica de México ha estado determinada en gran medida por la sujeción a las redes globales del capital monopolista internacional y al papel dentro de la división internacional del trabajo basada en la orientación exportadora dentro del bloque económico de América del Norte. El bloque de poder social que emerge en México desde los 1980, con la imposición del Consenso de Washington, está conformado por la burguesía multinacional y nacional que concentra el capital monopolista. El papel protagónico lo tienen las corporaciones multinacionales, que concentran la propiedad, la inversión, el trabajo y la renta. Desde los 1970, estos capitales cuya sede operativa está en los países centrales (Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia), con el apoyo de sus Estados, han desplegado intrincadas redes en la economía mundial donde se han apropiado de territorios, yacimientos y reservorios de trabajo barato para amplificar sus dominios y ámbitos de valorización. El Estado mexicano ha entre-

gado los sectores económicos estratégicos y más rentables a estos capitales y en consecuencia han reestructurado la economía para sumarse a la exportación de petróleo, gas, minerales, alimentos y productos maquilados.

Los sectores clave están controlados por estos capitales: grandes bancos privados (BBVA-Bancomer, Citigroup-Banamex, HSBC, Santander, Scotiabank), comercio (Walmart), agroindustria (Anheuser-Busch InBev, Coca-Cola, Kellogg's, Kraft, Monsanto, Nestlé, Pepsico), bienes de consumo general (Procter & Gamble, Unilever), farmacéutica (Bayer), industria manufacturera-maquiladora (Nissan, General Motors, Chrysler), informática (Microsoft, Apple, Google, Facebook, Twitter) infraestructura (Odebrecht, OHL) y sus dominios se expanden; además de los fondos de inversión y fondos especulativos que no tienen paternidad. Desde la perspectiva del país receptor aparecen como un «capital abstracto», puesto que los dueños y directivos no hacen acto de presencia en el país, son verdaderas sociedades anónimas que sin embargo mueven los principales hilos de la economía nacional a través de redes de capital mundial. Establecen alianzas estratégicas con corporaciones nacionales de talante rentista, quienes fungen como proveedores del gran capital multinacional o las desplazan del mercado merced a su mayor densidad de capital con tecnología de vanguardia. Pero lo más significativo es que la mayor parte del excedente generado en México es transferida a los centros neurálgicos de las finanzas, la industria y el consumo.

Una camada de multimillonarios de origen nacional se ha gestado con la operación de este modelo de despojo. La mayoría aglutinada alrededor del Consejo Mexicano de Negocios, el Consejo Coordinador Empresarial y la Asociación de Banqueros de México. Es la vieja y nueva oligarquía que se ha consolidado o emergido con el proyecto neoliberal, beneficiaria de los programas de despojo y privatización de bienes nacionales y comunales, que se ha apropiado



de grandes parcelas de la economía pública y ha fincado emporios privados en actividades rentables. Se trata de los nuevos ricos que han crecido al amparo del Estado mexicano y sus privilegios para la clase política. Los capitales monopolistas nacionales establecen alianzas estratégicas con corporaciones multinacionales, fungen como proveedores o se inscriben en el funcionamiento de las redes globales de capital, desempeñando funciones de corte rentista, no son innovadores, ni impulsan investigación y desarrollo, pero deben su dominio y expansión al apoyo del Estado, que los financia, exenta de impuestos, subsidia y transfiere recursos públicos para diferentes efectos, incluyendo el rescate en tiempos de bancarrota. La gestión estatal les organiza y administra los mercados para mantener su dominio monopolístico. Se benefician de las concesiones estatales, los contratos de obra pública, las exenciones fiscales y la fuga de capitales.

Los multimillonarios de México, según *Forbes*, son los mismos desde la administración privatizadora de Salinas de Gortari: Slim, Bailères, Larrea, Garza Lagüera, Salinas Pliego,

González Barrera, Azcárraga, Harp Helú, Arango y Aramburuzabala. Entre los grandes consorcios nacionales se encuentran Cemex, Bimbo, Telmex, Televisa, Maseca, Banorte. La mayoría sólo puede subsistir en el mercado nacional bajo el resguardo de concesiones, asignaciones y contratos estatales, y apenas 16 corporaciones forman parte de las principales 50 translatinas, es decir, empresas de base mexicana con presencia en diversos países, sobre todo en América Latina y, algunas, en Norteamérica: Pemex, América Móvil, Femsa, Cemex, Grupo Alfa, Bimbo, Grupo México, Elektra, Gruma, Mexichem, Embotelladoras Arca, ICA, Casa Saba, Xignux, Industrias CH y Grupo KUO.¹ No obstante, desde el punto de vista del desarrollo nacional, se trata de una *lumpenburguesía*² que no dispone de una ideología propia, se subordina a los intereses del gran capital externo, al cual sirve como su gestor, promotor y defensor,

¹ Comisión Económica para América Latina y el Caribe, *La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe*, 2013, Santiago de Chile, CEPAL, 2014.

² André Gunder Frank, *Lumpen-burguesía: lumpen-desarrollo. Dependencia, clase y política en Latinoamérica*, Buenos Aires, Ediciones Periferia, 1973.

Una camada de multimillonarios de origen nacional, aglutinados alrededor del Consejo Mexicano de Negocios, el Consejo Coordinador Empresarial y la Asociación de Banqueros de México, se ha beneficiado de los programas de despojo y privatización de bienes nacionales y comunales.

y en ello obtiene beneficios al ser copartícipe del modelo de acumulación.

Los peores al poder

El poder del Estado y sus diversos órganos conforman una instancia crucial para el desarrollo del capitalismo y la preservación de los empresarios potentados. En el periodo neoliberal, el Estado ha sido asumido por la tecnocracia que reina en las principales secretarías y una burocracia política que controla los ámbitos legislativos. No sólo por el arribo a las altas esferas del poder de personajes con manifiesta incultura y frivolidad, sino por su rapacidad, enriquecimiento y violencia, han merecido el apelativo de *kakistocracia*, «el gobierno de los peores», que corrompen la política por partida doble: están entregados a convertir la política en un ámbito de negocios, a enriquecerse desproporcionadamente y a envilecer la vida pública del país; y desvirtúan el ejercicio de la representación política y terminan por representarse a sí mismos, convierten a la ciudadanía en un sujeto minusválido, pues de ser soberano pasa a ser sumiso y obediente.

Hace casi cuatro décadas que el gobierno del Estado mexicano es comandado por una burocracia tecnócrata articulada por economistas ortodoxos de formación neoclásica-neoliberal, formados en universidades estadounidenses (Harvard, Yale) y mexicanas (ITAM) que fungen como guardianes del programa económico del Consenso de Washington y en consecuencia operadores de la privatización, extranjerización y monopolización. Los gestores tecnócratas siguen a pie juntillas las directrices de los organismos internacionales (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Organización Mundial del Comercio, entre otros) que dictan el programa económico con objeto de abrir espacios de valorización preferentes al capital monopolista internacional. En su fuero interno, carecen de ideología propia, simplemente siguen un dogma neoliberal, y en su fuero externo se metamorfosean doblemen-

te: cambian de bando entre la burocracia estatal y la burocracia corporativa o asumen cargos de asesor y accionista de empresas beneficiarias por el modelo, y pueden servir indistintamente a los gobiernos en turno con distinta filiación partidaria; presumen que su labor es técnica, no política.³ Son los adoradores del dios dinero que se han formado devotamente en la visión economicista de universidades estadounidenses y sus sucursales nacionales.

La burguesía burocrática se especializa en la gestoría del capital como mediadora entre el capital transnacional o nacional y las autoridades y sindicatos para, por ejemplo, implementar megaproyectos a través de reformas legislativas, servicios de consultoría e integración de portafolios de inversión de diversas ramas, como la minero-metalúrgica, petrolera, turística, maquiladora, etcétera. Los gestores del capital forman una casta política compuesta por congresistas, secretarios de Estado, gobernadores y presidentes municipales que manejan la cuestión pública como si fuese un asunto privado y se enriquecen merced al latrocinio organizado insertado en la médula del proyecto neoliberal.

Desde los órganos del Estado se han procesado grandes atracos a la nación: la privatización (despojo de bienes nacionales), el Fobaproa (rescate de banqueros y la reprivatización de la banca) y la gestión de la deuda (acumulación de deuda con derecho preferente de acreedores externos), el programa de austeridad (restricción del gasto público en rubros sociales y transferencia de recursos al sector privado), además de la implementación de megaproyectos de infraestructura bajo el esquema público-privado, la política de despojo de bienes comunales para instalar megaproyectos extractivos, la administración de la crisis mediante la militarización (incremento de partida de seguridad nacional en detrimento del gasto social) y el ataque a la clase trabajadora (contra sindicatos y desplome del salario).

³ Carlos Tello y Jorge Ibarra, *La revolución de los ricos*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2012.



La tecnocracia se ha metamorfoseado en cleptocracia. La institucionalización de la corrupción y el saqueo de los bienes nacionales se refleja en los casos de Enrique Peña Nieto, Emilio Lozoya, Aurelio Nuño, José Manzur, entre otros.

La tecnocracia se ha metamorfoseado en cleptocracia y se plasma en la institucionalización de la corrupción y el saqueo de los bienes nacionales. Desde la esfera de la gestión gubernamental la corrupción ha funcionado como una medida para el enriquecimiento de los tecnócratas. El presidente Enrique Peña Nieto ha sido señalado como propenso a la corrupción (por ejemplo, el caso de la casa blanca valuada en 86 millones de pesos, cuya la propiedad proviene de Grupo Higa, constructora cercana al presidente),⁴ y él mismo la justifica diciendo que «la corrupción es una cultura».⁵ El caso de Emilio Lozoya ha sido revelador, pues habría recibido 10 millones de dólares de la empresa brasileña constructora Odebrecht cuando era miembro de la campaña de Peña Nieto y como director de Pemex.⁶

⁴ «La casa blanca de Enrique Peña Nieto (investigación especial)», *Aristegui Noticias*, 9 de noviembre de 2014, en <https://aristeguinoticias.com/0911/mexico/la-casa-blanca-de-enrique-pena-nieto/>

⁵ Arturo Rodríguez, ««Me sostengo» en lo dicho, «la corrupción es cultural»: Peña Nieto», *Proceso*, 8 de septiembre de 2014, en <https://www.proceso.com.mx/381646/me-sostengo-en-lo-dicho-la-corrupcion-es-cultural-pena>

⁶ «Revelan video que implica a Lozoya en el pago de sobornos de Odebrecht», *Proceso*, 5 de diciembre de 2017, en

Diversas dependencias federales han desviado más de 7 mil millones de pesos desde 2010, en lo que se ha llamado la Estafa Maestra, asignando presupuesto a universidades públicas, las cuales a su vez otorgan contratos a empresas fantasmas, pero los servicios no se realizan y el dinero desaparece.⁷ El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, gastó mil 963 millones de pesos en 2017 en promoción de «imagen», sobrepasó en 2 mil 700 por ciento lo autorizado por el Congreso, esto en el contexto de un deterioro acusado del sistema educativo (por ejemplo, escuelas sin servicios sanitarios ni agua) y de la crisis de insolvencia de una veintena de universidades públicas.⁸ Una postal de la vida fastuosa de los funcionarios públicos la representa el secretario de gobierno del Estado de México, José Manzur, quien es propietario

<https://www.proceso.com.mx/513826/revelan-video-implica-a-lozoya-en-pago-sobornos-odebrecht>

⁷ Nayeli Roldán, Miriam Castillo y Manuel Ureste, *La Estafa Maestra. Graduados en desaparecer el dinero público*, México, Temas de hoy, 2018.

⁸ Claudia Salazar, «Excede SEP 2,700 por ciento el gasto en imagen», *Reforma*, 12 de mayo de 2018, en <https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1392430&v=5&urlredirect=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1392430&v=5>

de un rancho, con lago artificial, zoológico y un almacén con 136 autos de colección, la mayoría Ford Mustang, sin contar otras propiedades, empresas, joyas, obras de arte y caballos.⁹ Más aún, 23 exgobernadores están en la mira por la comisión de delitos de corrupción como enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada, lavado de dinero, entre otros; algunos están denunciados o prófugos y otros han sido encarcelados.¹⁰

La prédica priista, seguida con esmero por la mayoría de los políticos profesionales, es la de que «un político pobre es un pobre político». Esta conseja tiene su correlato en el enriquecimiento de los expresidentes y exsecretarios que lograron amasar fortunas y propiedades en sus mandatos, perciben jugosas pensiones vitalicias y algunos son empleados de corporaciones multinacionales a las cuales beneficiaron en sus sexenios. Por ejemplo, Felipe Calderón percibe 5 millones de pesos al mes como expresidente, además de bonos, compensaciones, personal de ayudantía,¹¹ y es empleado de la corporación Iberdrola. Vicente Fox, un político que llegó prácticamente quebrado a la presidencia, se convirtió en un empresario próspero con una familia que ha acrecentado su presencia en el ámbito de los negocios.¹²

No existe una medida clara del costo de la corrupción en México, pero se especula que puede alcanzar hasta 10 por ciento del PIB. Sin embargo, lo sintomático es que pese a sus múltiples evidencias, no existen mayores consecuencias, prevalece la impunidad. Instancias como la Secreta-

ría de la Función Pública son irrelevantes, pues están inmersas en la práctica política justificatoria de la cleptocracia: exoneran a los inculpados, encriptan los expedientes peliagudos como información reservada, omiten investigar casos relevantes. En otros países han caído presidentes por actos de corrupción, pero en México no pasa nada, todo se encubre con la tentativa de que es una cultura nacional.

Gran partido del orden y el dinero

En la teoría democrática, se supone que el Parlamento es la reunión de las diversas posturas políticas representadas por partidos de izquierda, centro y derecha que deliberan sobre los asuntos públicos y legislan. No obstante, la supuesta representatividad se ha desleído para decantarse hacia el flanco derecho y posteriormente articular un consenso neoliberal que fija la agenda de debates y el trabajo legislativo, de tal suerte que el quehacer parlamentario se asume como negociación, cabildeo y tráfico de influencias dentro de esos límites. Más que una variedad de partidos políticos, la coalición de intereses ha cristalizado en un gran partido del orden y el dinero que legisla de consuno con el propósito de preservar y profundizar el proyecto neoliberal, mantener la dominación sin consenso social, ampliar los espacios de valorización del gran capital y mantener bajo control los mecanismos de reproducción de la clase política. En todo lo alto se teje una alianza entre la tecnocracia y la cleptocracia a fin de gestar un régimen político de *kakistocracia* y una condición social de plutocracia. El gran poder social está constituido por el dinero, y quienes concentran este poder forman el poder oligárquico.

Dentro del contexto de una profunda deslegitimidad presidencial y del conjunto de la clase política, derivada del fraude electoral, las élites políticas formaron una coalición de gobierno metaparlamentaria, el Pacto por México —como antes fueron los pactos económicos—, para

⁹ Sanjuana Martínez, «El rancho del hombre fuerte de Eruviel: 136 autos de colección, lago artificial marca Higa, zoo...», *Sin Embargo*, 6 de marzo de 2017, en <http://www.sinembargo.mx/06-03-2017/3166174>

¹⁰ «Hay 23 exgobernadores bajo la mira por presunta corrupción», *Alcaldes de México*, 23 de febrero de 2018, en <http://www.alcaldesdemexico.com/notas-principales/profugos-encarcelados-o-bajo-la-mira-gobernadores-senalados-por-corrupcion/>

¹¹ Enrique Méndez, «Se destinan 40 millones de pesos al año a pensiones y gastos de expresidentes», *La Jornada*, 22 de julio de 2016, en <http://www.jornada.unam.mx/2016/07/22/politica/015n1pol>

¹² Raúl Olmos y Valeria Durán, *Fox: negocios a la sombra del poder*, México, Grijalbo, 2017.



El trabajo legislativo suele caracterizarse por congelar iniciativas de cambio y procesar rápidamente las contrarreformas, incluso resguarda el edificio con la fuerza pública; además se cabildea a favor de los grandes consorcios y se cobra por orientar la votación.

imponer mediante golpes parlamentarios las contrarreformas en materias laboral, energética, educativa, fiscal, seguridad interior, etcétera. Este espacio es compenetrado por cabildeiros y grupos de interés infiltrados en los grupos parlamentarios con el objeto de determinar los grandes lineamientos políticos y legislativos. La premisa del orden obedece a la dominación del capital y la contención de la resistencia, rebelión y activismo de sindicatos, movimientos sociales y otras organizaciones populares. La contraofensiva suele enmarcarse en la construcción de un «enemigo interno» que justifique el despliegue de una política del miedo, el odio, el desprecio, el clasismo, la guerra sucia y la contrainsurgencia. El orden en contra del cambio, la preservación de privilegios, posiciones, riquezas y relaciones de poder.

También el orden puede entenderse como la pretensión de estabilizar a las instituciones y garantizar que permanezcan inamovibles, indiferentes a la descomposición de la sociedad y a las demandas populares de cambio, democracia, justicia y equidad. La imposición de un orden autoritario, como lo es el neoliberalismo, es una política reaccionaria, dada la imposibilidad del orden perpetuo; sin embargo, merced al monopolio de la violencia y la concentración de los espacios de representación, logran plas-

mar un diseño constitucional contrarrevolucionario, que le permite crear una identidad compartida al bloque de poder compuesto por los poderes oligárquicos, los políticos neoliberales y los intelectuales neoconservadores. Empero, en términos históricos nada es inamovible, no puede existir un orden permanente: acontecen crisis, conflictos, luchas, revoluciones, contrarrevoluciones. Los partidos del orden pueden diferenciarse por colores, discursos, antecedentes, personalidades, pero sus intereses concretos se articulan en la defensa del orden capitalista, tal es el régimen político del triunvirato PRI-PAN-PRD y sus comparsas, donde eventualmente pueden ser absorbidos Morena y sus aliados.

El trabajo legislativo suele caracterizarse por congelar iniciativas de cambio y procesar rápidamente las contrarreformas, incluso resguarda el edificio con la fuerza pública; se cabildea a favor de los grandes consorcios y se cobra por orientar la votación («moches»). Al respecto, se ha denunciado, por ejemplo, que el «gobierno entregó alrededor de 30 mil millones de pesos a legisladores del Congreso de la Unión (para que) votaran a favor de una ley o para el presupuesto».¹³ Habitualmente, la labor

¹³ «Anaya, Meade y Videgaray estuvieron involucrados en «moches» del Congreso: AMLO», *SDPNoticias*, 27 de abril de

de un diputado o senador se asume como la de «bajar recursos» de la federación a entidades y municipios y por ello suelen cobrar una partida, el «moche». La obra pública es pródiga en la repartición de recursos a los gestores y en la asignación de determinadas empresas constructoras con vínculos políticos. Ante la falta de transparencia, el escándalo ofrece algunos ejemplos, como ocurre con los señalamientos periodísticos sobre los líderes parlamentarios del PAN y el PRI por el presunto cobro de regalías a cambio de entrega de recursos públicos.¹⁴ Pero esta es una práctica que se ha institucionalizado: los diputados apartan recursos millonarios para «moches» que ascienden de 9 y 10 mil a 500 millones de pesos que se repartieron discrecionalmente en 2016; cada uno de los 500 diputados podía acceder a 21 millones de pesos que gastaría sin comprobación transparente.¹⁵ Bajo ese mecanismo negocian «diezmos» con gobiernos, municipios y contratistas. Asimismo, los congresistas locales ofrecen sus servicios para limpiar las cuentas municipales.¹⁶

El PRI ha sido cabeza de playa del modelo de gestión al que se han sumado el resto de los partidos políticos y desde su posición de fuerza cabildan a favor de las grandes corporaciones que se apropian de territorios estratégicos para instalar megaproyectos. Ejemplo de ello son la ley minera o la nueva ley de playas, que permiten el despojo de tierras para implantar la megami-

2018, en <https://www.sdpnoticias.com/nacional/2018/04/27/anaya-meade-y-videgaray-estuvieron-involucrados-en-moches-del-congreso-amlo>

¹⁴ David Martínez y Marco Antonio Martínez, ««Los mochos», sean del PAN, PRI o PRD, evidencian la opacidad en la que opera el Poder Legislativo: analistas», *Sin Embargo*, 21 de marzo de 2014, en <http://www.sinembargo.mx/21-03-2014/938696>

¹⁵ Francisco Nieto, «Se apartan diputados bolsa millonaria para «mochos»», *La Silla Rota*, 10 de noviembre de 2016, en <http://lasillarota.com/congreso/se-apartan-diputados-bolsa-millonaria-para-moches/129625>

¹⁶ Verónica Espinosa y Álvaro Delgado, «Revelan red de diputados y funcionarios de SLP que piden «mochos» a alcaldes para limpiar sus cuentas», *Proceso*, 12 de junio de 2017, en <https://www.proceso.com.mx/490726/revelan-red-de-diputados-y-funcionarios-de-slp-que-piden-moches-a-alcaldes-para-limpiar-sus-cuentas>

nería contaminante que se vale de contratos de protección o la extensión de la propiedad de las costas hasta el mar para favorecer a inversionistas estadounidenses de la industria hotelera y a españoles que están dominando la hotelería de playas. En el esquema operativo aparecen despachos que se dedican a ofrecer a empresas transnacionales servicios de gestoría y sociedad a partir de la integración de portafolios de inversión en sectores que han sido desregulados por las reformas estructurales, como el minero-metalúrgico, que contienen un precontrato y una lista de funcionarios que interceden en la obtención de la propiedad minera y condiciones favorables a la inversión, como la formación de sindicatos blancos y los permisos para explotación. Los gestores ofrecen la mediación entre las empresas transnacionales y los nuevos socios. En los hechos, el esquema de negociación destruye el derecho, la legalidad y la vida colectiva.

Criminalización y populismo punitivo

Desde la concepción liberal dominante, la dupla corrupción e impunidad significa la degradación del Estado de derecho, y en efecto esa circunstancia está enraizada en la ineficacia del sistema de procuración de justicia. Los delitos cometidos en las altas esferas del poder no son sancionados y de serlo son por intrigas entre grupos y partidos políticos. Lo mismo sucede entre los empresarios oligarcas, para quienes está reservada la más completa impunidad. En contraste, se practica el populismo punitivo para justificar la acción judicial, pero se incrimina a chivos expiatorios o se criminaliza a los pobres, quienes pueblan las cárceles del país. Además, se practica una política tendiente a la «cero tolerancia» a las manifestaciones, huelgas y protestas, ante las cuales se aplican operativos policiales para cercarlos, contenerlos y disolverlos. Los líderes opositores suelen ser detenidos y apresados como presos políticos, sin que tal condición se reconozca. En tanto que las guardias



La dupla corrupción e impunidad significa la degradación del Estado de derecho. En efecto, esa circunstancia está enraizada en la ineficacia del sistema de procuración de justicia.

blancas y grupos paramilitares practican tácticas contrainsurgentes a fin de dismantelar organizaciones y movimientos populares. Para los opositores al régimen político se ha aplicado, reiteradamente, «todo el peso de la ley» y los activistas suelen ser estigmatizados como «transgresores de la ley».

La inconsistencia práctica del Estado de derecho posibilita que el ámbito judicial tolere de forma sistemática la impunidad de quienes cometen grandes delitos, que son encubiertos y no abordados, esto es posible por la corrupción de jueces, fiscales, ministerios públicos, policías y administradores de cárceles, agentes que se supone deberían de garantizar la legalidad. La impartición de la justicia se mueve en las sombras: la llamada «cifra negra», es decir, los delitos perpetrados que no son conocidos por los diversos agentes del ámbito judicial. En esa tesitura, en 2016 se estima que fueron víctimas de algún tipo de delito 24.2 millones de mexicanos mayores de 18 años, de los cuales 74.3 por ciento no fue reportado a las autoridades,¹⁷ esto significa que 3 de 4 delitos no son denunciados por varias razones, como el temor de que la propia autoridad tome represalias, que comunique la

¹⁷ Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Enviipe) 2017, *Boletín de prensa 417/17*, 26 de septiembre de 2017, en http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/enviipe/enviipe2017_09.pdf

denuncia al crimen organizado o que el caso se archive. Entre los delitos que sí son denunciados, apenas se concluye la investigación ministerial en 4.55 por ciento y en sólo 1.6 por ciento se pone a disposición de los jueces a los presuntos culpables; las condenas judiciales alcanzan una cifra de 1.06 por ciento y la impunidad representa una cifra global de 99 por ciento,¹⁸ razón por la cual se puede afirmar que la justicia es prácticamente inexistente.

El problema de fondo es lo que se concibe como delito y lo que no. No está en esa consideración la violación del valor de la fuerza de trabajo, la destrucción de la naturaleza, la especulación con las necesidades sociales, el despojo de los bienes comunes, la enajenación de los bienes de la nación, el saqueo de la riqueza nacional, el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias, etcétera. Es más delito que un pobre robe por hambre: en el país hay unos 7 mil detenidos en cárceles con penas de 10 años por robar para comer productos como leche, pan, mantequilla, yogurt, carne, alitas de pollo;¹⁹ en

¹⁸ Miguel Carbonell, «Corrupción judicial e impunidad: el caso de México», en Ricardo Méndez (coord.), *Lo que todos sabemos de la corrupción y algo más*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2010.

¹⁹ Guadalupe Fuentes, «El robo por hambre en México encierra a 7 mil personas, la mayoría mujeres, en la cárcel», *Sin Embargo*, 14 de octubre de 2015, en <http://www.sinembargo.mx/14-10-2015/1513879>

cambio el latrocinio organizado no se sanciona, como se colige en casos emblemáticos como la muerte de 65 trabajadores en la mina Pasta de Conchos de Minera México, la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas en Ayotzinapa, la masacre de 72 migrantes centroamericanos en San Fernando, la muerte de 49 niños y las heridas a 106 en el incendio de la guardería subrogada ABC, la contaminación de los ríos Sonora y Bacanuchi, la adquisición de la Casa Blanca y la casa de Malinalco, la evasión en paraísos fiscales, y un largo etcétera.

Mano dura

El sistema de poder ha estado soportado por un régimen autoritario que tiene en la violencia la fuerza para contener disidencias y oposiciones, además de preservar un modelo que carece del respaldo popular. La militarización de amplio espectro ha fungido como ariete de la «guerra contra las drogas», con el cual se pretende revertir el Estado fallido y la ilegitimidad de los gobiernos en turno que han ascendido mediante comicios fraudulentos. La militarización de la política migratoria, con el Plan Frontera Sur, significa el sellamiento del país frente a Centroamérica y la criminalización de los migrantes procedentes de esa región para cumplir un papel represor asignado por el gobierno estadounidense a través de la Iniciativa Mérida, la versión actual del Acuerdo para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), derivado de la política de seguridad complementaria al Tratado de Libre de Comercio de América del Norte (TLCAN). La guerra es la anulación de la política, y la militarización la anulación de la convivencia y las libertades cívicas.

Las reformas al Código Penal y la aprobación de la Ley de Seguridad Interior están amparadas en las prescripciones de la doctrina de seguridad nacional, el prohibicionismo y el populismo punitivo en manos de un Estado gendarme que se preocupa, sobre todo, de conceder las libertades

a los grandes capitales y disciplinar a la población dentro de los márgenes del dominio del capital. La politización y uso electoral del sistema penal mexicano impulsa el populismo punitivo desde las posiciones más conservadoras, bajo la premisa de que incrementar el castigo previene el delito. En esa línea se amplía el espectro de conductas estipuladas como delictivas: actualmente se asientan 600 conductas delictivas en el Código Penal Federal, cuando en el texto original de 1931 sólo se contemplaban 290, aparte de lo que se considera en los códigos estatales y leyes especiales. La mayor severidad de las penas se traduce en la existencia de delitos que pueden alcanzar hasta 140 años de prisión.²⁰ El aumento de las penas no ha disminuido la incidencia delictiva ni ha mejorado la percepción de inseguridad. En los últimos 17 años, la incidencia delictiva nacional se ha incrementado en 22.4 por ciento, sobre todo los homicidios dolosos. Para 2017 se registró la tasa de homicidios dolosos más alta con 20.51 homicidios por cada cien mil habitantes; en tanto que la percepción de inseguridad ha crecido, en 2017 alcanzó su tope (74 por ciento), según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública.²¹

Estas disposiciones son clasistas, pues tienden a criminalizar a hombres jóvenes de las clases populares²² y contribuyen a la criminalización de luchadores sociales, algunos de los cuales son asesinados, desaparecidos o amenazados. La estrategia estatal de militarización se remonta a la política de contrainsurgencia entre las décadas de los 1970 y 1990,²³ continúa como respuesta al movimiento

²⁰ Karen Silva y Montserrat López, «Resistir la campaña del castigo», *Animal Político*, 15 de febrero de 2018, en <https://www.animalpolitico.com/blogueros-el-blog-de-mexico-evalua/2018/02/15/resistir-la-campana-del-castigo/>

²¹ Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, *op. cit.*

²² Catalina Pérez, «Marcando al delincuente: estigmatización, castigo y cumplimiento del derecho», *Revista Mexicana de Sociología*, vol. 75, núm. 2, 2013.

²³ Laura Castellanos, *México armado, 1943-1981*, México, Era, 2007.

zapatista²⁴ y se prolonga con la «guerra contra las drogas» y la contención de migraciones indocumentadas centroamericanas.²⁵ Este fenómeno se ha sobrellevado a la transición política y la alternancia electoral y pretende legitimar la acción militar en las tareas de seguridad pública bajo el argumento simplificado de que todos los cuerpos policiales son corruptos, por lo cual es necesario que sean suplidos por militares, quienes serían disciplinados y políticamente neutrales, o bien, que se generan vacíos de poder que hay que llenar con la sobrerrepresentación del Ejército y la Marina.

Entre 2008 y 2017, Estados Unidos ha suministrado 1.6 millones de dólares para el Plan Mérida destinado a la «guerra contra el narcotráfico» y otras tareas mediante el entrenamiento de instructores estadounidenses en tácticas de contra-insurgencia y equipamiento de helicópteros y aeronaves para los militares, pero también la Policía Federal patrulla las calles en vehículos armados, con chalecos antibalas y fusiles de asalto: ostentan un poder de fuego similar al de los marines estadounidenses.²⁶ A ello se suma la aprobación de la Ley de Seguridad Interior que tiene el cometido de brindar un marco jurídico a la militarización, es decir, amparar legalmente lo que ya está sucediendo en los hechos desde hace varios sexenios, de Zedillo a Peña Nieto. Con todo, la respuesta militar al problema de la crisis del Estado y la violencia ha acrecentado la espiral de violencia y criminalizado a los sectores populares.

Intelectualidad contratista

Los voceros oficiosos del sistema de poder tienen una gran presencia en los medios de comunicación audiovisuales e impresos. Los intelectuales

²⁴ Carlos Fazio, *El tercer vínculo: de la teoría del caos a la teoría de la militarización*, México, Joaquín Mortiz, 1997.

²⁵ Luis Astorga, *Seguridad, traficantes y militares: el poder y la sombra*, México, Tusquets, 2007.

²⁶ Timothy Schwier, «El sanguinario camino de la militarización en México», *Animal Político*, 5 de diciembre de 2017, en <https://www.animalpolitico.com/blogueros-seguridad-180/2017/12/05/militarizacion-mexico/>

orgánicos en conjunción con los «líderes de opinión» son los voceros ilustrados de las fuerzas conservadoras que detentan el poder. Ya fueran herederos o críticos del paradigma de intelectual impuesto por Octavio Paz, quien simulaba una distancia crítica con el príncipe (Estado), pero se beneficiaba de sus prebendas y privilegios a la vez que le hablaba al oído y justificaba su práctica política autoritaria. En la etapa dura del neoliberalismo se afianzaron los proyectos político-intelectuales de dos grupos que estaban en disputa y terminaron por congeniar dentro del consenso neoliberal: *Letras Libres*, liderado por Enrique Krauze, y *Nexos*, bajo la dirección de Héctor Aguilar Camín. Entre 2002 y 2016, las empresas Clío y Nexos, de los grupos de Krauze y Aguilar Camín, recibieron del gobierno federal más de 162 millones de pesos mediante contratos de adjudicación directa. El más conspicuo intelectual de la derecha, Krauze, se publicita como un intelectual libre sin vínculos con los gobiernos, pero en realidad funge como un «contratista intelectual»,²⁷ cuyo grupo ha oscilado de una ideología anticomunista al neoconservadurismo.²⁸ En todo caso, la élite intelectual mexicana forma un polo intelectual de derecha, neoliberal y reaccionaria, que defiende sus propios intereses y los intereses oligárquicos. Ellos determinan la idea de cultura, arte y pensamiento, política y democracia. Se mueven dentro de márgenes ideológicos muy acotados, aunque disponen de grandes canales de difusión que les permiten influir en la masa social.

Pensar con cabeza ajena

Asistimos a un desdoblamiento de los medios de comunicación tradicionales y digitales que modifica el juego político y llega a crear la imagen de

²⁷ César Octavio Huerta, «Enrique Krauze, el contratista intelectual consentido de Peña Nieto», *Polemón*, s.f., en <https://polemon.mx/enrique-krauze-el-contratista-intelectual-consentido-de-pena-nieto>

²⁸ Avital Bloch, «Vuelta y cómo surgió el neoconservadurismo en México», *Culturales*, vol. IV, núm. 8, 2008.

una «democracia digital» dentro de un mundo empresarial concentrado. Existe una correlación entre la monopolización de la comunicación y la producción de subjetividades: 11 familias de oligarcas controlan más de la mitad de los medios de comunicación con las mayores audiencias y perciben la mitad del presupuesto de la publicidad oficial²⁹ y en esa medida proporcionan la información al conjunto de la nación integrada por 125 millones de personas y quienes habitan en otros países que tienen como fuente principal de información sobre México estos canales.

Haciendo un símil con el presidencialismo mexicano, el paradigma de la comunicación recaía en un solo individuo, Jacobo Zabludovsky, quien desde la pantalla de Televisa dictaba a la nación las noticias del día, lo que no apareciera en ellas no existía, y así lo reproducía la mayoría de los medios informativos. Con la reconfiguración del régimen neoliberal, lo sustituye Joaquín López Dóriga, quien sigue las enseñanzas de su maestro y se posiciona como el nuevo paradigma comunicacional (lo apodan el *teacher*); sin embargo, la publicación de sus negocios turbios y tráfico de influencias lo sacarían del centro de atención. López Dóriga se había dedicado a hacer negocios al amparo del gobierno y de la cobertura mediática, lo cual le reportaba un enriquecimiento desmedido reflejado en la propiedad de departamentos y yate de lujo, y la posesión de empresas que cobran a dependencias federales por hacer menciones, campañas y entrevistas, un negocio lucrativo por el que habría recibido al menos 237 millones de pesos entre 2001 y 2015, mediante adjudicación directa. De hecho el área de influencia se extiende hasta los gobiernos estatales, quienes también hacen erogaciones para publicitarse.³⁰

²⁹ Centro Nacional de Comunicación Social y Reporteros Sin Fronteras, «Propiedad de los medios», *Media Ownership Monitor México*, 2018, en <http://mexico.mom-rsf.org/es/propietarios/>

³⁰ Jenaro Villamil, «López Dóriga: cuando el micrófono tiene precio», *Proceso*, 26 de septiembre de 2015, en <https://www.proceso.com.mx/416533/lopez-doriga-cuando-el-microfono-tiene-precio>

El espectro comunicacional tradicional basado en medios analógicos, electrónicos e impresos, se ha modificado drásticamente con la emergencia de los medios digitales, no sólo por el desdoblamiento comunicacional de unidireccional a interactivo, sino por la formación de nuevos monopolios internacionales de la información y la comunicación y la recodificación de los patrones de consumo y la producción de subjetividades.³¹ Esta circunstancia brinda la pauta a nuevas prácticas de comunicación y otras formas de convivencialidad desplegadas o simuladas por «redes sociales» digitales. Ejemplo de ello son los jóvenes llamados *millennials*, usuarios compulsivos de redes digitales como Facebook, Twitter, YouTube y WhatsApp, operados por monopolios que se convierten en el referente de la innovación, la vanguardia y la comunicación en tiempo real, al punto en que también han generado la imagen de una «democracia digital», sobre todo cuando se atribuye al medio la formación de movimientos sociales, protestas y manifestaciones, en distintos países.

Rebaño sagrado

El poder eclesiástico ha sido coadyuvante de la dominación política, desde tiempos de la Colonia y hasta el presente, aun cuando haya sufrido reveses como las leyes de reforma que desamortizaron sus bienes y abrieron la construcción de un Estado laico. Pese a ello se han resistido, desde la Cristiada se formaron enclaves conservadores en el país, sobre todo en la región del Bajío, que a su vez influyeron en la formación de partidos políticos, sobre todo el PAN, y lograron restablecer gran parte de su poderío e influencia política con el neoliberalismo, a partir de Salinas de Gortari, quien retoma las relaciones diplomáticas con el Vaticano y abre el activismo político de los clérigos, quienes desde el púlpito suelen orientar políticamente a sus feligreses.

³¹ Jenaro Villamil, *La rebelión de las audiencias. De la televisión a la era del trending topic y el like*, México, Grijalbo, 2017.



El que gran parte de la sociedad mexicana sea conservadora, vote a favor de sus verdugos y se mantenga impávida y sumisa se debe, en buena medida, al influjo católico. La Iglesia católica ha ralentizado las movilizaciones sociales y los procesos de cambio social. Sobre todo, se ha opuesto a la legalización del aborto, los matrimonios entre homosexuales y la política de izquierda («¡cristianismo sí, comunismo no!»).³² Con el panismo en las principales esferas del poder ha retornado la prédica cristiana conservadora, a partir de grupos como el Yunque y el foxismo, o el intento calderonista de reinterpretar la historia de México desde visiones conservadoras.³³ Dentro de la jerarquía eclesiástica prevalece una teología de la opulencia y se relega la teología de la pobreza, es decir, los arzobispos y obispos suelen estar muy cerca de los círculos de poder y distantes de las clases

menesterosas,³⁴ esto dentro de una Iglesia que su máximo dirigente quisiera «pobre y para los pobres».³⁵

Muerte redituable

En México se ha tejido el argumento de que el crimen organizado creció al amparo del Estado que regulaba esta actividad y establecía una cierta pacificación, pero con la «transición a la democracia», es decir, la alternancia entre PRI y PAN, las organizaciones criminales quedaron liberadas del influjo estatal y ganaron autonomía relativa, por lo que comenzaron a disputarse entre sí los mercados y se enfrentaron al Estado por el control territorial y los mercados con el objeto de garantizar los negocios ilegales. Más precisamente, para la doctrina de seguridad nacional, una política impuesta por la

Se impone la fórmula de la necropolítica, la maquinaria de guerra estatal que combina con la violencia sistémica (la superexplotación laboral y el despojo), la militarización como mecanismo de control político y represión social y la violencia de las organizaciones criminales que coadyuvan al desplazamiento forzado, la apropiación de territorios y la formación de economías de enclave exportador.

³² María Pacheco, «¡Cristianismo sí, comunismo no! Anticomunismo eclesiástico en México», *Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México*, núm. 24, 2002.

³³ Pedro Salmerón, *Falsificadores de la historia y otros extremos*, México, Ítaca, 2015.

³⁴ Bernardo Barranco (coord.), *Norberto Rivera, el pastor del poder*, México, Grijalbo, 2017.

³⁵ EFE, «El papa Francisco: <Cómo me gustaría una Iglesia pobre y para los pobres>», *Público*, 16 de marzo de 2013, en <http://www.publico.es/internacional/papa-francisco-me-gustaria-iglesia.html>

política imperialista estadounidense, siempre existe un enemigo interno, en este caso, los cárteles de la droga, entre los cuales han destacado el Cártel del Pacífico y sus ramificaciones (el Cártel de Tijuana, el Cártel de Juárez y el Cártel Jalisco Nueva Generación), el Cártel del Golfo, Los Zetas, la Familia Michoacana, Los Templarios y el Cártel del Milenio. Estas organizaciones, se supone, actúan de manera autónoma al Estado, transgreden el Estado de derecho, generan una espiral de violencia y amenazan la seguridad nacional y la paz social. La solución es combatirlos sin tregua mediante la «guerra contra las drogas», que incluye la militarización del país. Entonces se impone la fórmula de la necropolítica, la maquinaria de guerra estatal que se combina con la violencia sistémica (la superexplotación laboral y el despojo), la militarización como mecanismo de control político y represión social y la violencia de las organizaciones criminales que coadyuvan al desplazamiento forzado, la apropiación de territorios y la formación de economías de enclave exportador.

En el sentido económico del término, no existen los cárteles de la droga, pues las organizaciones no establecen acuerdos para eliminar la competencia, regular la producción y distribución, dividir los mercados, fijar los precios y compartir beneficios; tampoco entablan acuerdos para regular la competencia internacional. Esta actividad no es autónoma, orquestada por «cárteles de narcotraficantes», sino que forma parte del engranaje del capital donde se aloja una renta criminal que ofrece altos dividendos y cuenta con el respaldo subrepticio del Estado, cuyas instituciones organizan, regulan y vigilan los mercados, desde la producción, almacenamiento y trasiego de drogas y otro tipo de delitos. El capital criminal incluye a los grandes operadores financieros, bancos privados, paraísos fiscales; empresarios de diversas ramas económicas donde se «lava» el dinero sucio; funcionarios estatales de los ámbitos legislativo, judicial y ejecutivo; fuerzas del orden público; y una amplia

gama de profesionistas y empleados que se inscriben en distintas etapas del proceso que sigue el dinero negro progresivo y la valorización de la renta criminal. Es una actividad de corte transnacional, que articula varios países, con la peculiaridad de que las mayores ganancias se quedan en los países consumidores, como Estados Unidos, y el costo humano de violencia y muerte se transfiere a los países productores o traficantes, como México, donde además se emprende una irracional «guerra contra las drogas», que arroja muertes, desapariciones y desplazamientos.

La economía criminal es un componente orgánico del capitalismo neoliberal y la violencia opera como parte de su engranaje en pos del control de los ámbitos de valorización que articulan actividades delictivas con actividades legales que devengan una renta criminal, una peculiar forma de ganancia extraordinaria. Por sus conductos fluye dinero negro que se mezcla con actividades formales para ser «lavado», se acrecienta y alcanza grandes réditos. Las drogas y otras mercancías ilícitas asociadas alcanzan altas cotizaciones en el contexto del prohibicionismo, el tráfico de armas, el populismo punitivo y la «guerra contra el narcotráfico». El quebranto de la reproducción social y la proliferación de población considerada redundante o «desechable» forman un caldo de cultivo para la propagación de diversas actividades delictivas y propician que las organizaciones criminales recluten entre los excluidos a sus nuevos miembros, seducidos por la promesa del dinero fácil y el tren de vida acelerado, a sabiendas de que se incrustan en actividades con alto poder de destrucción de vidas humanas, pues funciona a partir de una espiral de violencia de muertes, desplazamientos, desaparecidos, secuestros y robos. No obstante, las muertes por la violencia criminal y estatal son justificadas por los gobernantes como simples «daños colaterales» o «hechos aislados» dentro de una «guerra contra las drogas», incluso se inculpa a las víctimas mediante el rumor de que «andaban en malos pasos» o no eran gente «decente».

Organizaciones y acción colectiva

Sistema de partidos

El sistema de partidos en México ha estado centrado en el partido de Estado (el PRI-gobierno) que ha reinado la mayor parte del siglo XX y lo que va del presente. Esta vertiente se ha transformado para mantenerse vigente. En un primer tramo tomó la ideología nacional-revolucionaria y se arrogaba la herencia de la Revolución mexicana, aún cuando se formó una élite política autoritaria que controlaba férreamente a las diversas clases sociales. Bajo el influjo del imperialismo, en el contexto de la crisis del petróleo y las finanzas, se opera un cambio ideológico y de programa de gobierno para entregarse al neoliberalismo y las prédicas del Consenso de Washington. El partido de Estado dismantela el pacto populista y adopta una nueva alianza con el gran capital. Entonces se metamorfosea en el gran partido del orden y el dinero, una coalición política de las élites en torno a las grandes directrices económicas y políticas neoliberales. Sobre la forma partido de Estado campea una alianza de las élites privilegiadas, los denominados poderes fácticos, que fungen como una junta de gobierno metaconstitucional, transexenal y metaparlamentaria. Históricamente, la forma partido de Estado ha definido desde la cúpula el proyecto de nación (del nacionalismo revolucionario al neoliberalismo) y ha organizado el sistema de partidos en torno suyo (partidos satélites, partidos comparsa, pactos, acuerdos y coaliciones, reformas electorales y simulaciones de «transición a la democracia»). En el centro siempre ha estado la supervivencia y hegemonía del proyecto dominante.

Partidocracia

En la era neoliberal, el sistema de poder ha simulado una apertura democrática que alcanzó su cenit con la «transición política», que no es otra cosa que la alternancia electoral entre par-

tidos que comparten, cada vez más, la misma ideología y programa de gobierno. Los partidos políticos tienen tres características: operan como empresas privadas en las que el dinero manda a las ideas, olvidan el programa y estudio de la realidad para fungir como una federación de grupos regionales que se reparten las posiciones y relegan cualquier pretensión de autonomía para adoptar fielmente el consenso neoliberal.

La forma partido político, como representación de sectores concretos de la sociedad, sean clases sociales o articulación de clases, se ha disuelto. En la partidocracia autorreferencial, centrada en el fetichismo político, da forma al partido empresa, donde se impone la gestión de negocios, el tráfico de influencias, el patrimonialismo, la vindicación de la economía de mercado y la democracia electoral y, sobre todo, la defensa de los espacios de valorización. Es, pues, una agencia de colocación, una oficialía de partes influida por los grupos de interés y cabilderos, que hacen de la palabra gestión el símil de la praxis política. La contienda política no entraña una disputa ideológica, una guerra de ideas, una confrontación de proyectos de nación, sólo importa la disputa por recursos, posiciones, privilegios y dinero.

Los líderes políticos asumen que estamos en un mundo desideologizado, la llamada pospolítica, donde todo se vale: comenzando por el pragmatismo, la negociación, las alianzas contranatura y la defensa de los grandes intereses del capital. Ya no importa la identidad y la ideología, por lo que hay vía libre para el intercambio de cuadros políticos («chapulinazo»), a la manera de los jugadores de fútbol que cambian de camiseta cada temporada o, más precisamente, como mecanismo de movilidad política ascendente. La mejor manera de mostrar una «cercanía a la gente», una honorabilidad y arrastre popular, es decir, que «no todos los políticos son iguales» o, al menos, argumentar que algunos son «el mal menor» o que algunos «saben cómo hacerlo», con respecto a seguir aplicando la norma tecnocrática.

En efecto, los partidos están inmersos en una profunda crisis de representación: no representan al pueblo, menos a clases sociales específicas o a articulaciones de clases. Primero se representan a sí mismos, como políticos profesionales, agentes activos de las clases políticas, y luego representan los intereses del orden y el dinero, valga decir, del Estado y el gran capital. En ese contexto, es propicia la emergencia de líderes políticos populistas, que dicen representar al pueblo y negociar en su nombre. Así pues, el espectro político se estrecha entre el neoliberalismo y el populismo, esquemas de falsa representación del conjunto y diversidad social.

Con la imposición del proyecto neoliberal, se desplazó a la vieja clase política plegada a la ideología del nacionalismo revolucionario y se prohió otra clase política tecnocrática, pragmática y oportunista. En el horizonte de tres décadas se ha tornado una clase política «perpetua», inamovible, una generación hegemónica con incesante actividad, sin relevos o, a lo sumo, con la incorporación de jóvenes adocenados. Los políticos de la política se reparten los puestos del poder: saltan de un cargo a otro, de un partido a otro, de un discurso a otro, pero siempre están en la palestra, plegados al presupuesto público, levantando la mano, gestionando a favor del gran dinero. Cuando hay acusaciones y encarcelamientos, es para efectos de depuración del régimen, de afeites cosméticos.

Activismo político empresarial

Un actor político determinante dentro del proyecto neoliberal han sido los organismos cupulares empresariales que aglutinan a la élite del poder económico, los dueños de grandes capitales que participan en la bolsa y la industria, articulados con la banca privada, que están interesados en que no haya cambio en la política económica. No sólo ha dejado de figurar como actor filantrópico y de operar políticamente en el conciliábulo para influir en las sombras, sino

que ahora el alto empresariado nacional figura públicamente como activista político, asume el nuevo protagonismo de la derecha empresarial y rebasa a los partidos convencionales, a los cuales ha estado financiando soterradamente, para imponer la agenda corporativa al Estado, los partidos políticos y candidatos. Los organismos cúpula como el Consejo Mexicano de Negocios, el Consejo Coordinador Empresarial y la Asociación Mexicana de Banqueros concentran los grandes capitales financieros e industriales. En una franja media están los sindicatos patronales como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco).

En el plano legislativo cabildan para promover determinadas leyes favorables al sector patronal, como lo ha hecho de manera destacada Mexicanos Primero y Televisa, para imponer la reforma educativa, o Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad para posicionar a la corrupción como el supuesto principal problema y establecer el Sistema Nacional contra la Corrupción. O el episodio más reciente, donde el Consejo Mexicano de Negocios da un golpe en la mesa con el desplegado «Así no», para recriminar al candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador,³⁶ quien habría denunciado acuerdos cupulares para pactar entre la presidencia y el candidato que más se aproxima al primero, Ricardo Anaya, con la intención de ofrecer un frente común proempresarial.

Los cabilderos son grupos de interés que buscan influir en la toma de decisiones, operan a favor del sector empresarial, aunque también puede haber del sector público, sindicatos y ONG. Las Cámaras de Diputados y Senadores

³⁶ Consejo Mexicano de Negocios, «Así no», *Reforma*, 3 de mayo de 2018, en <https://aristeginoticias.com/wp-content/uploads/2018/05/cmnm.jpg>

registran hasta 696 grupos de cabilderos al servicio de transnacionales y grandes empresas refresqueras, mineras, tabacaleras, transportistas, para promover iniciativas, reformar artículos o bloquear reformas. Se trata de despachos de abogados, economistas y politólogos formados por los políticos y exlegisladores, tales como Grupo Estrategia Política y la consultoría Políticas Públicas y Asesoría Legislativa. Suelen estar envueltos en la sospecha de corrupción y tráfico de influencias: casos de soborno para favorecer intereses empresariales, como la industria del tabaco. Existe incluso una Asociación Nacional de Profesionales del Cabildeo: organizan «información útil» y la canalizan a diputados y senadores para que tomen sus decisiones. También el gobierno mexicano contrata a cabilderos para restaurar la imagen de su gobierno en Estados Unidos por problemas como la influenza o la inseguridad o negociar temas particulares, el TLCAN con Salinas, o promover destinos turísticos.

Asimismo, los grandes empresarios cuentan con asociaciones emergentes que incursionan en el activismo político como cabilderos que respaldan las agendas políticas de derechas y como promotores de diversos candidatos y orquestadores de campañas sucias electorales, de corte clasista y difusoras del miedo y el odio. En la guerra cultural o la batalla de las ideas el empresario cuenta con una red de interés empresarial expandida con la proliferación de los *think tank*, es decir, institutos de investigación, laboratorios de ideas, gabinetes estratégicos o centros de pensamiento vinculados a fundaciones y organismos internacionales o a organismos empresariales nacionales que se encargan de analizar o evaluar los asuntos públicos desde una perspectiva empresarial. Es el caso del Instituto Mexicano para la Competitividad, Transparencia Internacional, México Evalúa, Centro de Investigación para el Desarrollo, además del Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Consejo Mexicano de Asuntos Internaciona-

les (Comexi), Ethos, Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) y Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).

Sociedad civil corporativa

Estos grupos de interés influyen en determinados líderes de opinión en los medios tradicionales, sobre todo impresos y audiovisuales, y los *influencers* que cuentan con presencia importante en los medios digitales como Instagram, Vine, Twitter y YouTube, donde tienen un gran número de seguidores. La propagación de campañas e ideas proempresariales por estos medios contribuye a la formación de un sentido común afecto a estilos de vida, visiones del mundo y políticas que interesan a los hombres del dinero.

Ha cobrado gran importancia la política orientada hacia las «audiencias» de medios electrónicos e impresos tradicionales y los usuarios de los emergentes medios digitales³⁷ que han generado la imagen de la «democracia digital», aún cuando son operadores de espionaje y venta de datos en un mercado multimillonario de la Big Data operado por intermediarios como Cambridge Analytica, que han influido en grandes procesos electorales, como el de Estados Unidos y el *brexit*,³⁸ y que recurre a métodos sucios para ganar elecciones, como *fake news*, trampas sexuales, espionaje y sobornos,³⁹ empresa que también habría maniobrado en México. El gobierno mexicano usa herramientas digitales para espiar y *bots* (programa informático) para manipular a los ciudadanos, tal como sucedió en las elecciones del Estado de México en 2017, para descarriar a la candidatura de Morena y entronizar al candidato oficialista, heredero de la dinastía Del

³⁷ Jenaro Villamil, *La rebelión de las audiencias...*

³⁸ «La Big Data y el espionaje electrónico», *TeleSUR*, 14 de marzo de 2017, en <https://www.telesurtv.net/telesuragenda/-La-Big-Data-y-el-espionaje-electronico-20170313-0022.html>

³⁹ «Así son los sofisticados métodos que usó Cambridge Analytica para influenciar elecciones en todo el mundo (también en América Latina)», *BBC Mundo*, 22 de marzo de 2018, en <http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-43500891>

Mazo y del grupo político que ejerce un cacicazgo regional y actualmente ocupa la presidencia de la república, el ensayo general de las elecciones federales de 2018.⁴⁰

La educación privada de corte empresarial y confesional no sólo ha carcomido el proyecto de educación pública, laica y gratuita, sino que se ha ocupado de moldear el eje tecnocrático del modelo económico mediante la formación de la burocracia tecnocrática que ocupa los cargos directivos en los aparatos estatales y los consorcios empresariales. En esta función destaca el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) de Baillères y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) de la familia Garza Sada.

En la llamada sociedad civil ha cobrado protagonismo una multiplicidad de ONG y grupos de interés, a menudo promovidas por fundaciones privadas internacionales y nacionales y el gobierno para respaldar y radicalizar las políticas neoliberales. De manera especial un grupo de 22 organizaciones empresariales se presentan como las voceras de la sociedad civil. El cometido del sector empresarial es organizar diversas agrupaciones para que incidan en los comicios y en el diseño y aprobación de las políticas públicas, los proyectos legislativos y las candidaturas.

Asociaciones civiles con nexos con la derecha empresarial como México Unido contra la Delincuencia y Alto al Secuestro se entrecruzan con organizaciones emergentes como Ahora o proyectos como wikipolítica,⁴¹ para replantear el espacio de una sociedad civil de corte pragmático, que convalida los fundamentos del modelo económico y que llama la atención sobre algunos de sus síntomas (corrupción, violación de derechos humanos o delincuencia) sin cuestionar a fondo

los componentes estructurales y los intereses del sistema de poder.

Aristocracia obrera y menguante poder de los trabajadores

Los sindicatos suponen protección, apoyo mutuo, poder colectivo y capacidad de negociación con la patronal en condiciones de simetría. Pero el neoliberalismo está montado sobre la proclama ideológica de que los partidos son un monopolio que hay que combatir, incluso se consideran como la «bestia negra» o el «enemigo interno». El neoliberalismo ha significado en el orbe una embestida en contra de las organizaciones sindicales, las condiciones de vida de los trabajadores y el desmantelamiento de la red de protección social. El movimiento conservador a escala mundial se revitalizó con la embestida neoliberal en los países de referencia del capitalismo central. Para imponer su ley de hierro, en Reino Unido Margaret Thatcher combatió a los sindicatos, comenzando con el minero, y privatizó el sector público; su homólogo estadounidense, Ronald Reagan, quien se oponía al comunismo desde tiempos del macartismo, comenzó golpeando a los sindicatos de controladores de vuelos.

El presidencialismo mexicano, que tuvo en el corporativismo su mecanismo de control político, desmontó las estructuras sindicales para convertirlas en una simulación y hacer de esas figuras un conjunto corporativo de control obrero. Muy pocos serán sindicatos independientes. El corporativismo había permitido con antelación el control político de los trabajadores por los propios líderes sindicales, que se enriquecían a costillas de sus representados y ocupaban puestos de poder político.⁴²

⁴² En la trama histórica, son apoteóticas las declaraciones de los líderes históricos del sindicalismo corporativo: Napoleón Gómez Sada: «Subir salarios, ni lo mande Dios»; Blas Chumacero: «No hace falta aumento salarial, lo que necesitan es dirigentes que cumplan con su representación y sus obligaciones de manera responsable, los trabajadores están dispuestos a posponer sus intereses gremiales y favor de la patria»; Leonardo Rodríguez

⁴⁰ «El gobierno de México usa bots para manipular opinión en redes, afirma la Universidad de Oxford», *Sin Embargo*, 17 de julio de 2017, en <http://www.sinembargo.mx/17-07-2017/3264608>

⁴¹ Israel Solares, «El consenso de 2018», *Horizontal*, 27 de marzo de 2018, en <https://horizontal.mx/el-consenso-de-2018/>

Este enriquecimiento desmedido de los líderes sindicales afines al régimen político ilustra la corrupción corporativa. Un ejemplo entre varios es Carlos Romero Deschamps, senador priista y líder del sindicato petrolero, señalado por desviar 500 millones de pesos del sindicato a la campaña de Francisco Labastida en 2000, caso conocido como el *Pemexgate*,⁴³ amén de ostentar un nivel de vida ostentoso y lujoso: ha sido publicitado que dispone de un departamento y yate de lujo en Cancún con costo de tres millones de dólares, un reloj de 400 mil dólares, entre muchos otros detalles. Otra anécdota ilustrativa es la del líder sindical que se presentó a la firma del Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y Protección de la Economía Familiar, estos pactos de sujeción política con pomposos títulos demagógicos, ostentando un reloj de 400 mil pesos y dijo que forma parte de los sindicalistas que «hemos estado al pie de las fábricas y las máquinas y sabemos que se siente».⁴⁴ En contraste con esta aristocracia obrera, un cúmulo de más de 4.4 millones de personas trabajan a tiempo completo y viven en pobreza extrema.⁴⁵

Alcaine: «Los trabajadores están sin problemas, no sufrirán con las alzas en la canasta básica, los impuestos tampoco les afectarán, porque nunca han estado jodidos, en muchas empresas están bien remunerados, el nuestro no es un país de obreros jodidos; los trabajadores no deben sentirse engañados, ningún trabajador se ha muerto de hambre, porque la situación no es tan. La crisis económica financiera es benéfica, es un huracán que beneficiará a la clase trabajadora».

⁴³ Carlos Álvarez, «Romero Deschamps, el del *Pemexgate*, reelecto por quinta vez en el sindicato», *Zeta*, 11 de diciembre de 2017, en <http://zetatijuana.com/2017/12/romero-deschamps-el-del-pemexgate-reelecto-por-quinta-vez-en-el-sindicato/>; Flor Goche, «Romero Deschamps: vida de lujos, despilfarro y corrupción», *DesInformémonos*, 7 de octubre de 2015, en <https://desinformemonos.org/romero-deschamps-vida-de-lujos-despilfarro-y-corrupcion/>

⁴⁴ Viridiana Ríos, «Y traía un reloj de 400 mil pesos», *Excelsior*, 22 de enero de 2017, en <http://www.excelsior.com.mx/opinion/viridiana-rios/2017/01/22/1141401>

⁴⁵ Paradójicamente, cientos de médicos protestaron por sus aumentos salariales, asegurando que ya ganan demasiado dinero, pero esto fue en Quebec, Canadá (Amy Wang, «Aumento salarial molesta a médicos», *El Economista*, 8 de marzo de 2018, en <https://www.economista.com.mx/internacionales/Los-waffles-en-casa-de-la-canciller-Chrystia-Freeland-20180428>



Con el avance de las reformas neoliberales se dismantela progresivamente la Ley Federal del Trabajo y el artículo constitucional que lo tutela para imponer la flexibilización y precarización laboral. Al mismo tiempo, los gobiernos combaten a los sindicatos independientes para derrocar su organización, privatizar las empresas públicas y vencer los últimos bastiones del poder obrero organizado: es el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) o la lucha sin cuartel contra la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y la imposición de la reforma educativa, o el desmantelamiento de Mexicana de Aviación y su sindicato para consolidar un monopolio con Aeroméxico. En todo caso, la democratización del país es imposible sin la organización de

-0003.html). Claro, lo hacen en un país donde se perciben altos ingresos y en solidaridad con otros trabajadores de su sector, como las enfermeras, que en cambio perciben bajos salarios en términos relativos.

Carlos Romero Deschamps, senador priista y líder del sindicato petrolero, ha sido señalado por desviar 500 millones de pesos del sindicato a la campaña de Francisco Labastida en 2000, caso conocido como *Pemexgate*.

los trabajadores y sin la democratización de los sindicatos.

Movimientos sociales: la marcha de las siglas

En distintos momentos, planos y niveles, el proyecto neoliberal ha sido resistido por movimientos sociales, frentes políticos, sindicatos, estudiantes e intelectuales. En menor medida se ha establecido un frente amplio para contrarrestar el modelo en su conjunto. La mayoría son reivindicaciones parciales, tematizadas o coyunturales.

En la actualidad existen diversos tipos de movimientos sociales:

Movimiento indigenista. Los pueblos originarios reclaman el reconocimiento de derechos y cultura indígenas, como los mayas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y los pueblos originarios del Congreso Nacional Indígena, también casos más particulares como los wixárika contra el extractivismo minero y en defensa de sus territorios o el pueblo yaqui en defensa de su territorio.

Movimiento campesino. Pugna por acceso al presupuesto y los programas de gobierno para apoyo a la producción, financiamiento y comercialización, asimismo en defensa del territorio y la biodiversidad, en contra del TLCAN y en pos de la soberanía alimentaria. En este periodo se han manifestado múltiples organizaciones, como El Barzón, la campaña Sin Maíz no hay País y sin Frijol tampoco y el Plan de Ayala Siglo XXI.

Movimiento obrero. Los trabajadores que defienden sus condiciones de trabajo (salario, prestaciones), se resisten al desempleo y la precarización laboral, mediante paros, huelgas, plantones y marchas. Ha destacado el activismo magisterial y su articulación con otros sectores populares como la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, los trabajadores sindicalizados despedidos como el SME y Mexicana de Aviación.

Movimiento estudiantil. Tiene referentes en el movimiento de 1968, las huelgas universitarias del Consejo General de Huelga en defensa de la educación, los movimientos de estudiantes rechazados de la universidad pública; el movimiento YoSoy132 en contra de la imposición mediática de Enrique Peña para restablecer el régimen priista y la movilización estudiantil en contra de la violencia estatal y criminal, en particular por los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa.

Movimientos por la justicia, desaparecidos y víctimas de la violencia y por la paz. Los movimientos de víctimas de la violencia como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), Movimiento Migrante Centroamericano y la caravana Viacruz Migrante.

Movimientos en defensa del territorio, el agua y la biodiversidad. Los afectados por el despojo de tierras por megaproyectos y desplazamiento forzado por la criminalidad en pos del territorio.

Movimientos electorales. Los frentes electorales y partidos políticos han consecuentado la vertiente electorera y no se han atrevido a organizar una fuerza permanente opuesta al neoliberalismo que proponga un proyecto alternativo.

Movimientos ciudadanos. En contra de la carestía, como las jornadas nacionales de protesta en contra del incremento del precio de los combustibles (el «gasolinazo»).

Movimiento feminista. Se opone al patriarcado, a la violencia de género y a la ola de feminicidios que ha caracterizado al régimen neoliberal, sobre todo alrededor de las trabajadoras precarias de las maquiladoras.

Movimientos culturales. Organizaciones de creadores y trabajadores de la cultura en pos de la defensa del patrimonio cultural y su apropiación con fines de convertirlo en mercancía y valorarlo para favorecer al capital privado.

Movimientos por la diversidad sexual y grupos culturales.

Movimientos culturales y artísticos.

El pueblo, la ciudadanía

En el polo social opuesto a la plutocracia, permanecen conjuntos familiares y comunidades enteras en situación de miseria, hambre, violencia y muerte. Los pueblos originarios han sido los más excluidos y violentados, las comunidades campesinas han sido progresivamente desmanteladas, los estudiantes de familias pobres excluidas de la educación pública de nivel superior, la mujeres pobres proletarizadas, pauperizadas y violentadas, los jóvenes desamparados incorporados a las filas de la criminalidad, los trabajadores han sido despojados de derechos y precarizadas sus condiciones de vida, las poblaciones han sido desplazadas de territorios para instalar megaproyectos, incluyendo actividades ilícitas.

El hecho es que el patrón de acumulación se ha forjado con base en la formación de una clase proletaria móvil sumamente explotada a disposición del capital multinacional que soporta el flujo exportador mexicano. En aras de una conversión de la fuerza de trabajo en valor, en salario mínimo y plusvalor acrecentado, se mantiene un obsecado régimen laboral de superexplotación. Para los tecnócratas, el «[a]umento de salario mínimo podrá generar inflación»;⁴⁶ anteponen el aumento al incremento de la productividad, es decir, el incremento del plusvalor antes que el incremento del poder adquisitivo del salario y la reproducción de la vida humana en condiciones dignas. Advierten que los salarios no aumentarán, y en esa lógica la macroeconomía es una entidad sana basada en la contención salarial, en la miseria humana. Y el secretario del «trabajo» dice sin tapujos que es «peligroso andar jugando a aumentar los salarios mínimos». Como garante del clima favorable a los negocios, el gobierno

⁴⁶ Leonor Flores, «Aumento al salario mínimo podría generar inflación: Carstens», *Milenio*, 7 de agosto de 2014, en http://www.milenio.com/negocios/Carstens_salario_minimo-Banxico_aumento_a_salario-Agustin_Carstens-salario_-100_DF_0_349765160.html

suprime la huelga y la libre negociación.⁴⁷ Es la lucha de clases en plena expansión: la fuerza del capital y el Estado en contra de los trabajadores desorganizados y sin representación.

El neoliberalismo concibe a la ciudadanía de modo minimalista: a) un productor precario que trabaje en condiciones precarias y mal remuneradas, despojado de derechos sociales y laborales, sin organización sindical y condescendiente con las metas de productividad empresarial; b) un consumidor compulsivo que si no tiene poder de compra por el salario reprimido acuda al crédito y se someta a la servidumbre por deudas; y c) un elector pasivo que vote por representantes del consenso neoliberal o que se abstenga de hacerlo, pero que contribuya a la reproducción del sistema de poder. Las instancias de poder y organización ciudadana merecen ser disuadidas, cooptadas, reprimidas, estigmatizadas.

El perfil de la sociedad mexicana que busca consolidar el régimen político es el conservador. Los temas que se abren a debate son los de la agenda liberal, tales como el aborto, el matrimonio homoparental, la legalización de la marihuana, pero los temas de fondo, el despojo, la explotación, la violencia, la discriminación, la criminalización, se encubren y no se discuten. Se aparenta apertura de opinión y libertad de expresión, pero se configura una sociedad despolitiza, desinformada y afecta a la industria del entretenimiento: son consumidores de televisión (series) y medios digitales (entretenimiento). En términos políticos quieren cambios profundos, pero sin costo social.⁴⁸ Y a ello han contribuido los partidos políticos, que prefieren tener simpatizantes y adherentes, antes que militantes y activistas.

En el circo electoral donde se representan viejos y consabidos papeles, la convicción política

⁴⁷ Lauro Sol y Óscar Alzaga, «El gobierno suprime la huelga y la libre negociación», *La Jornada*, 27 de octubre de 2016, en <http://www.jornada.unam.mx/2016/10/27/opinion/019a2pol>

⁴⁸ Sandra Rodríguez, «La sociedad en México quiere cambios pero que no le cuesten: Meyer», *Sin Embargo*, 9 de marzo de 2016, en <http://www.sinembargo.mx/09-03-2016/1633466>

de la ciudadanía posee un valor insignificante o se utiliza para orquestar maquinaciones y manipulaciones, como la de que los votantes de izquierda tienen que votar por quien se dice candidato de izquierda, aunque no lo sea o pacte tras bambalinas una agenda con la derecha y sectores de la oligarquía.

Punto de fuga

Frente a la voracidad y depredación del Estado y el capital que articulan un capitalismo que destruye aceleradamente las bases de la riqueza —humanidad y naturaleza—, es apremiante construir un proyecto civilizatorio que reivindique el valor del trabajo, la base social de la riqueza y sus formas de organización gremial: sindical y organizaciones clasistas, sus intereses y reivindicaciones, sus estructuras, prácticas, identidades y tradiciones, sus alianzas políticas; asimismo, que reivindique la naturaleza como el entorno de la reproducción de la vida humana y el ecosistema, en una simbiosis fundamental.

Frente a la consolidación de un polo derechizado, neoconservador, que reivindica los intereses del dinero y el orden, y que aglutina a la clase política de izquierdas y derechas alrededor

del consenso neoliberal, e independientemente del desenlace político-electoral en México, resulta imprescindible construir un polo de crítica, de organización, que emerja del movimiento popular y sus aliados, intelectuales, investigadores, creadores. Los partidos políticos de izquierdas y derechas, al unísono, están ocupados en luchas pragmáticas, oportunistas y cortoplacistas para ganar posiciones. Los ciclos políticos se basan en la organización de las elecciones, los programas de gobierno se acuerdan con los sectores oligárquicos. Todo se inscribe en la necesidad de reproducir el sistema de poder. 🐦

Los ciclos políticos se basan en la organización de las elecciones, los programas de gobierno se acuerdan con los sectores oligárquicos. Todo se inscribe en la necesidad de reproducir el sistema de poder.

